



Boletín de Científicos y Universitarios autoconvocados

Julio de 2016 N° 2



NO CAMBIARON. VOLVIERON

EDITORIAL: El gobierno de las corporaciones

A razón de mil despidos por día avanza la restauración neoliberal del gobierno de Macri. El disciplinamiento de los trabajadores mediante el miedo a perder la fuente de trabajo constituye el sólido vector por el que transita el intento por retornar a un esquema fuertemente regresivo del ingreso. Según la ultraliberal Fundación de Investigaciones Latinoamericanas (FIEL), la Canasta Básica Total aumentó desde octubre del año pasado un 33,5% mientras que el incremento para el lapso medido desde abril de 2015 a la resolución electoral que llevó a Macri a la presidencia fue de un escaso 6%, siempre para la misma Fundación. El aumento permanente de los precios domésticos, reforzados por el brutal tarifazo de los servicios públicos, recortó sensiblemente el salario real de los trabajadores (el Centro CIFRA-CTA calcula una caída de 12 puntos porcentuales entre diciembre de 2015 y marzo del corriente año). Al mismo tiempo, el intento deliberado por destruir el mercado interno comienza a mostrar sus primeros resultados objetivos: cierre de comercios, despidos y suspensiones en diversos eslabones del tejido industrial y caída del consumo ante la amenaza cierta y real del desempleo. Por otra parte, el estribillo de las inversiones parece haber perdido la fuerza arrolladora con que venía siendo impulsada a la luz del agotamiento de tamaña fantasía. Fue la propia Vicepresidenta de la Nación quien reconoció que la tierra pro-

metida de la reactivación económica tampoco llegará durante el 2016.

En tal sentido, la brutal honestidad intelectual de Javier González Fraga no pudo ser más oportuna. "Le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso era una ilusión. Eso no era normal". Tales declaraciones no sólo dejan expuesto el profundo desprecio que la clase dominante siente por nuestro pueblo, también se pone de manifiesto, de manera cruda y descarnada, que para los sectores dominantes la movilidad social ascendente es vivida como una afrenta y que la "normalidad" es su completa abolición. Un pensamiento congruente con el del actual presidente, quien en 1999 sostenía que "para volver a ser competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace". Los Panamá Papers, la claudicación ante los fondos buitres y el pedido de disculpas de Prat Gay a los capitales españoles reflejan a la perfección el lugar central que ocupa la renuncia a la soberanía nacional y la fuga de capitales en el comportamiento "ético" de la clase dominante argentina. En la misma dirección se encuentra la convicción convertida en un artículo de fe que establece un vínculo directo, jamás probado empírica-

mente, entre la reducción de los costos laborales y la creación de empleo. La vergonzosa iniciativa llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, para subsidiar un programa de primer empleo en McDonalds constituye un ejemplo contundente. El esquema de mercado laboral desregulado, con trabajadores forzados a negociar paritarias a la baja ante el sensible incremento del desempleo, el deterioro del salario real y la contracción del mercado interno, constituyen el escenario donde se observa con nitidez el intento por imponer un nuevo proyecto de país.

Nuestra región está atravesando un momento particularmente difícil. Los sectores dominantes, que vivieron como una profunda agresión a los gobiernos populares, vuelven por lo que consideran el funcionamiento "normal" de nuestras sociedades: alto desempleo, salarios bajos, precarización laboral, especulación financiera y destrucción de los vínculos solidarios a partir de reinstalar la cultura del "sálvese quien pueda" individualista y meritocrática. El golpe institucional en Brasil, así como el secuestro de Milagro Sala en Jujuy y la reciente derogación del decreto de Raúl Alfonsín que establecía el control político sobre las fuerzas armadas, revelan la matriz profundamente autoritaria que traduce la nueva ofensiva neoliberal sobre nuestros pueblos.

POLÍTICA NACIONAL

La ofensiva neoliberal

POLÍTICA INTERNACIONAL

Brasil: el golpe de las corporaciones

POLÍTICA Y ECONOMÍA

El tarifazo de los impunes

POLÍTICA NACIONAL

La ofensiva neoliberal:

El estado en la mira

El macrismo reedita el viejo mito del Estado elefantiásico, hipertrofiado e inoperante, que la derecha ha utilizado históricamente para justificar la retracción de lo público en beneficio de lo privado



El arribo al poder de la Alianza Cambiemos expresa una profunda transformación en la concepción y orientación del Estado. Bajo el eufemismo de lograr un Estado "inteligente", "moderno" y más cercano a los problemas de "la gente" se verifica, en efecto, un proceso de vaciamiento que se da en distintos niveles. Bajo el enunciado de aligerar estructuras y volverlas eficientes se esconde, en realidad, un proyecto político: el de deslegitimar la acción estatal y correrla del centro de la iniciativa política y económica. La historia argentina muestra que la llegada de los neoliberales al gobierno (en 1976, en 1989 y, ahora, en 2015) se implanta sobre un discurso que busca desacreditar lo público y realzar las virtudes del mercado. El argumento es siempre el mismo: el mercado se configura como un espacio cargado de virtudes de "libertad de elección" y "competencia", donde los individuos (o las empresas) despliegan sus potencialidades sin coacción y el Estado es caracterizado como una institución burocrática, ineficiente y deficitaria. Para ello es necesario, en primer lugar, construir un relato de crisis que instala al Estado y sus políticas -sobre todo las económicas- en la mira. Cualquier acción estatal que busque poner un límite al libre mercado será acusada de populista y ubicada como la causa del retraso económico.

En una versión renovada, ajustada al espíritu de época, el macrismo reedita el viejo mito del Estado elefantiásico, hipertrofiado e inope-

rante, que la derecha ha utilizado históricamente para justificar la retracción de lo público en beneficio de lo privado, recalando el crecimiento desmedido del empleo estatal como factor preponderante. Todas las estadísticas desmienten este planteo. Desde el año 2002 al 2014 el empleo verifica un repunte sistemático en términos generales. Pero mientras que la planta de trabajadores estatales pasó de 2.136.142 a 3.239.614, el empleo en el sector privado evidenció un aumento aún mayor que fue de 3.523.283 a 6.409.447. Respecto del total, mientras que en el 2002 el empleo público representaba el 38%, en el 2014 se redujo al 32%.

Las razones del aumento del empleo público -en términos absolutos- encuentran respuesta en la redefinición del rol del Estado que planteó y sostuvo el kirchnerismo. Esto se tradujo en el despliegue de importantes políticas públicas que requirieron, lógicamente, de la ampliación de la estructura estatal para garantizar su desarrollo y que implicó la creación de 6 nuevos ministerios (entre los que se cuenta el de Ciencia y Tecnología), 14 organismos descentralizados, 15 nuevas universidades y 10 empresas estatales. Esta desagregación explica la composición de estos nuevos empleados, de los cuales el 50.4% son docentes, el 8.1% médicos, el 13.1% agentes de seguridad y el 28.4% restante corresponde al escalafón general.

Los más de 40.000 despidos en el Estado no vienen a operar solo en una dimensión cuantitativa. El objetivo central es producir una reorientación en los ejes de intervención del Estado que se comprende mejor si miramos los sectores donde se han operado los recortes y las reestructuraciones.

Por un lado, el proceso masivo de despidos apuntó al desmantelamiento de áreas y funciones estratégicas para reducir la participación activa del Estado en la estructura productiva y, al mismo tiempo, para avanzar en la desregulación de ciertas actividades que ocupan un lugar clave en el nuevo modelo económico, fundamentalmente los agro-negocios y el sistema financiero.

En este nuevo esquema, el Estado opera garantizando la maximización de las ganancias de los grandes grupos económicos desarticulando la normativa y los organismos regulatorios. Un claro ejemplo para estos dos casos es la virtual disolución del RENATEA (con más de 800 despidos), la desarticulación de la Unidad de Información Financiera (UIF) organismo encargado de controlar el lavado de activos (100 despidos) y la desintegración de las áreas del Banco Central abocadas a la supervisión de delitos financieros y cambiarios, derechos humanos y protección al usuario (47 despidos).

Al mismo tiempo, la estrategia de rediseño

apuntan a golpear estructuras que fueron consideradas prioritarias en el modelo político, económico y social previo en dos planos: por un lado, como agente promotor y partícipe activo del desarrollo económico y, por otro lado, como herramienta fundamental para el desarrollo social y garante de la inclusión en base a la ampliación de derechos.

Ejemplos paradigmáticos del primer aspecto son el vaciamiento del proyecto ARSAT (21 despidos), pieza clave para la soberanía tecnológica en materia de comunicaciones, la paralización del proyecto Atucha para el desarrollo energético (2.400 despidos) y la desarticulación de Fabricaciones Militares. En ésta última tuvo lugar un rediseño bien ilustrativo del nuevo paradigma: se cerraron por completo las áreas dedicadas a inversión y producción (140 despidos) y sólo se dejó en pie el sector de compras. El objetivo es evidente y explícito: se clausura la producción nacional de material militar para a ser reemplazada por importaciones.

Un segundo plano de funcionalidad de esta reestructuración es el retiro del Estado y sus políticas activas en materia de derechos como educación, salud, derechos humanos, laborales, cultura y desarrollo científico y tecnológico. Esto se materializó, por ejemplo, en el vaciamiento de los programas de salud comunitaria,

salud reproductiva, planes Fines y Conectar Igualdad, Orquestas y Coros Juveniles, entre muchos otros, que acarrió la expulsión de más de 1000 trabajadores en el Ministerio de Cultura, 1656 en el Ministerio de Desarrollo Social y casi 900 en el de Salud. En paralelo, el conjunto de despidos que se dieron en "áreas culturales" (como los 500 despidos del CCK, los 250 de la Biblioteca Nacional, los 115 de la AFSCA), junto con el fuerte ataque a los programas de Derechos Humanos vinculados a la investigación de delitos de lesa humanidad (que funcionaban en los Ministerios de Seguridad, Justicia y en la propia Secretaría de Derechos Humanos) ponen en evidencia la disputa simbólica que el macrismo quiere dar en áreas que estaban investidas de una gran legitimidad popular. La estigmatización que sufren los trabajadores del Estado por parte de funcionarios del gobierno, siendo la expresión más resonante el de "ñoquis", encubre una reorganización de las formas de intervención del Estado. Los miles de despidos de trabajadores públicos habilitaron al sector empresarial a replicar en la esfera privada la misma estrategia de disciplinamiento laboral. El veto a la ley que intentaba poner un leve freno a los despidos expresa claramente que los intereses del capital concentrado son aquellos que representa la Alianza Cambiemos, en claro detrimento del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras.

"En este nuevo esquema, el Estado opera garantizando la maximización de las ganancias de los grandes grupos económicos desarticulando la normativa y los organismos regulatorios. Un claro ejemplo para estos dos casos es la virtual disolución del RENATEA (con más de 800 despidos).

POLÍTICA INTERNACIONAL

Brasil: el golpe de las corporaciones

La incorporación de empresarios al ejercicio del poder político confirma una tendencia regional que merece ser explorada todavía más: las burguesías han optado por ejercer el poder en forma directa, sin intermediaciones



En Junio de 2013, fue la primera vez que la Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) iluminó con una bandera nacional la fachada de su edificio ubicado sobre la emblemática Avenida Paulista, para acompañar a las manifestaciones contra el gobierno de Dilma Rousseff. Desde entonces, la corporación empresaria más grande de América Latina, apoyó cada una de las protestas que se desarrollaron contra el gobierno del Partido dos Trabalhadores (PT). En marzo de 2015 la misma FIESP incorporó a sus manifestaciones contra el gobierno una intervención artística bajo la consigna "Não vou pagar o pato" y colocó unos robustos patos inflables al frente de su edificio. Luego, agregó una página de Internet (www.naovoupagaropato.com.br/) que incluía el pedido de impeachment contra la presidenta, firmada por empresas y federaciones empresarias, sindicatos y la Sociedade Rural Brasileira (SRB). Los medios locales, como el grupo O Globo, contribuyeron con una virulenta campaña destituyente. Intervino el Poder Judicial y sectores sociales de los estratos medios y medios/altos que salieron a las calles con reclamos diversos. El 17 de abril de 2016 el Congreso aprobó el ilegítimo pedido de juicio político contra Rousseff y, en la madrugada del 12 de mayo, fue ratificado en el Senado. El golpe ya se había consumado. Aunque los artífices de la destitución de Dilma se dieron cita en el Congreso, fue clave el papel de los grupos económicos.

Desde el primer gobierno de Lula, la economía brasileña se volcó hacia un modelo productivista, conformado por los industriales y el movimiento obrero organizado, que tenía por objetivo acelerar el crecimiento económico mediante una combinación de: mayor intervención estatal, ampliación del mercado interno, impulso a la reindustrialización y una importante redistribución de la renta.

En este esquema el bloque rentista, conformado por el capital financiero y la clase media tradicional con afinidad hacia el modelo neoliberal, aunque no se vio perjudicado, tampoco ocupó un lugar hegemónico. Si bien la economía brasileña no estuvo ajena a la tendencia regional que pulsiona hacia la reprimarización económica, durante todos estos años el país consiguió mantener la hegemonía del bloque productivista con un amplio despliegue de políticas sociales. Todavía más, incluso luego de la crisis internacional de 2008 Brasil experimentó un considerable crecimiento económico.

El gobierno de Dilma, en cambio, se desarrolló en una coyuntura crítica donde ninguna de las políticas implementadas logró palear el desaceleramiento de la economía. Con un discurso más confrontativo hacia el sector financiero, Dilma intentó, con muchas más dificultades que en años anteriores, dar continuidad al modelo productivista. Hasta el 2013, la burguesía empresaria paulista

sía empresaria paulista, nucleada en la FIESP, la corporación más importante del país que reúne alrededor de 130 mil industrias, acompañó al gobierno del PT. Inclusive, dos años antes había firmado el documento "Brasil do Diálogo, da Produção e do Emprego Acordo entre trabalhadores e empresários pelo futuro da produção e emprego" (2011), que tenía como propósito dar impulso y contribuir con el modelo económico que impulsaba Dilma.

Hacia 2013 el contexto económico, social y político cambió y se produjo una fisura en el bloque que acompañaba el proyecto político. Proliferaron las campañas mediáticas contra el gobierno de Dilma y se multiplicaron las protestas protagonizadas por los sectores medios y medios altos del país. Siguiendo la hipótesis del brasileño André Singer, los industriales, por razones más políticas que económicas, se apartaron del gobierno de Dilma y se acercaron al bloque rentista, conformando un frente burgués de oposición al modelo productivo. Tanto la FIESP como la Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que reúne a las burguesías agrarias, defendieron públicamente el golpe y reclamaron cambios en el rumbo económico.

Con la asunción interina de Michel Temer (Partido do Movimento Democrático Brasileiro-PMDB), los actores económicos que

habían pugnado por la destitución de Dilma se hicieron todavía más evidentes. Temer conformó un gabinete con orientación hacia el mercado financiero, que fue celebrado incluso por la prensa de orientación liberal en nuestro país, como *Ámbito Financiero* (jueves 12 mayo de 2016). El ministro de Economía, Henrique Meirelles, designó en el Banco Central, cuya tarea es definir la política monetaria y el sistema financiero en general, al socio del banco Itaú, Ilan Goldfajn. En otros ministerios sensibles, como Agricultura, Temer nombró a Blairo Maggi, también llamado el "rey de la soja", que preside el Grupo Maggi y es uno de los mayores productores a nivel individual de todo el mundo. En la Secretaría Especial de Inversiones, nombró a Wellington Moreira Franco, cuya primera medida fue impulsar el programa privatizador denominado "Crecer". Dicho programa prevé concesiones, sociedades mixtas y privatizaciones, es decir, una decidida reducción del papel del Estado que contrasta con la política económica implementada por ambos gobiernos del PT desde 2003 a esta parte.

La incorporación de empresarios al ejercicio del poder político confirma una tendencia regional que merece ser explorada todavía más: las burguesías han optado por ejercer el poder en forma directa, sin intermediaciones y las fronteras entre el

poder económico y la representación política parecen haberse desdibujado. Tomemos por caso algunos datos. El presidente de la FIESP, Paulo Skaf, es, además, un político del PMDB (partido que supo ser aliado al PT hasta el impeachment), afiliado hace tan sólo unos pocos años, a instancias de Temer. El empresario y ministro de agricultura Blairo Maggi, viene desempeñándose como Senador por el Mato Grosso y actualmente está en un proceso de afiliación al Partido Progressista (PP) con expectativas de proyectar su carrera política.

Con todo, el escenario político no está definido. Salvo el gobierno de Macri, los apoyos internacionales aún son retaceados. El gabinete conformado por Temer, el primero que desde 1982 no incluía mujeres ni afrodescendientes, tuvo que ser retocado en el transcurso de los días por las denuncias que pesan sobre los ministros designados. El acompañamiento empresarial tampoco ha sido en bloque cerrado y, como suele ocurrir con el capital, mira con atención el devenir del futuro gobierno.

Temer se sostiene sobre un delicado equilibrio que tiene por base el Congreso. Pero, en las calles el PT y los movimientos sociales con el innegable liderazgo de Lula, aún conservan un protagonismo indiscutido. La movilización puede estar forzando un cambio de estrategia de este golpe corporativo y, todavía, no está todo dicho...

Temer conformó un gabinete con orientación hacia el mercado financiero, que fue celebrado incluso por la prensa de orientación liberal en nuestro país, como *Ámbito Financiero* (jueves 12 mayo de 2016). "

CONVOCATORIA

Científicos y universitarios de todo el país confluirán en el “Encuentro Nacional de Ciencia y Universidad”, los próximos 2 y 3 de julio en la Universidad Nacional de Avellaneda

El espacio Científicos y Universitarios Autoconvocados (CyUA) reúne a investigadores/as de todos los niveles y disciplinas, miembros técnicos y becarios/as del sistema científico y universitario, y es el organizador del Encuentro que se realizará el primer fin de semana de julio, en la Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAV (sede España 350).

El Encuentro es una instancia para repensar y debatir el vínculo entre el desarrollo científico y académico y los distintos proyectos político-económicos, pero también para analizar la coyuntura en función de las políticas implementadas por el gobierno de la Alianza Cambiemos. De esta manera, científicos y universitarios

confluirán con diversos actores sociales, políticos y sindicales y se espera una masiva concurrencia de participantes provenientes de todo del país.

Durante la primera jornada del sábado 2/7, se llevará a cabo una dinámica de comisiones de trabajo para analizar los vínculos entre Ciencia, Universidad y Estado; las políticas científicas y universitarias nacionales y regionales y las condiciones de trabajo en el sistema científico y universitario argentino.

El evento se cerrará el domingo 3/7 con un plenario en el cual se recogerán los aportes de cada comisión con el fin de elaborar una plataforma de políticas científicas y universitarias y, al mismo tiempo, expresar

los principales puntos de preocupación de la comunidad científica y universitaria nacional ante el avance de fuerzas políticas neoliberales y antidemocráticas en el país y la región.

Más información:

<https://www.facebook.com/events/1403691073271657/>

Para participar del Encuentro inscribirse aquí:

<https://sites.google.com/site/enctyu/home>

Adhesiones:

cientificosyuniversitarios@gmail.com

POLÍTICA Y ECONOMÍA

El tarifazo de los impunes

Según el gobierno de Macri, los argentinos vivimos en un mundo irreal. Durante largos años “nos hicieron creer” que podíamos aspirar a tener una vida materialmente digna pero desconociendo los costos intrínsecos que acompañaban tal pretensión. A tal punto que el hecho de haber osado vivir mejor e intentar que las sensibles mejoras en las condiciones materiales de vida alcanzasen al conjunto de nuestro pueblo, fue catalogado como una “fiesta” que debía concluir. A mitad de camino entre el reproche y la sanción moral, los ricos que ejercen el gobierno del Estado se permiten llamar al brutal ataque confiscatorio al bolsillo de los trabajadores “sinceramiento” de la economía. La extraordinaria transferencia de recursos de ingresos de los sectores populares a los exportadores, las multinacionales y los bancos se lleva a cabo por diversas vías. Una de ellas es mediante el tarifazo a los servicios públicos, una medida que ha deteriorado en forma inmediata las condiciones materiales de vida de la población, mediante un incremento inédito y simultáneo en los servicios de energía eléctrica, gas, transporte y agua. Mientras que los aumentos del 100% del boleto mínimo de transporte (colectivos y trenes) y de hasta el 375% en el servicio de agua y cloaca se circunscriben al Área Metropolitana de Buenos Aires, el tarifazo energético afecta a todo el país.

El Ministerio de Energía y Minería, conducido por el ex CEO de Shell Juan José Aranguren, dispuso un incremento promedio del 257% de los precios para el mercado mayorista de electricidad con el objetivo de reducir los subsidios en el sector que impacta de distinta forma en cada distribuidora del país y, además, estableció

un nuevo cuadro tarifario para los usuarios de Edenor y Edesur.

En el caso del gas, esto supuso un incremento del 200% promedios para usuarios residenciales y 700% para usuarios industriales, aunque en la Patagonia alcanzó picos de 700% y 1200%, respectivamente. El ajuste estuvo motorizado principalmente por un injustificable salto del precio de gas en boca de pozo que pasó de poco más de 2 dólares promedio a 5 dólares por millón de BTU, muy por encima de los precios internacionales vigentes. El Estudio Bein estimó que de los 3500 millones de dólares que implicaban el nuevo precio que padecen hogares, pymes, comercios y clubes de barrio, sólo una tercera parte reduciría las erogaciones del fisco, mientras que el resto iría a las arcas de las petroleras. La multiplicación de focos de conflicto social alrededor del Ministerio de Aranguren, obligaron al Ministro del Interior Rogelio Frigerio a impulsar topes en el tarifazo, aunque insuficientes para suavizar su impacto.

A ello hay que sumar el fuerte aumento del precio de los combustibles tras la devaluación, ubicándose en el segundo lugar de la región detrás de Uruguay. Cabe resaltar que Shell es la segunda empresa expendedora de combustibles del país, por debajo de YPF.

En cualquier país del mundo, de los muchos que nos postulan como ejemplo a seguir, el actual Ministro de Energía estaría inhabilitado para ejercer dicho cargo por la ostensible y deliberada incompatibilidad en sus deberes de funcionario público. Más aún, no sería siquiera pensable que el

accionista de una de las principales multinacionales petroleras del mundo sea designado Ministro del área en el que aún detenta un declarado interés privado. El escandaloso otorgamiento de siete sobre ocho licitaciones a la empresa de la que aún forma parte en tanto que accionista, sería ciencia ficción en los países del Primer Mundo que nos ponen como espejo.

Pese a los precios “criollos”, la actividad petrolera retrocede. Mientras que en noviembre del año pasado había 114 equipos de perforación operativos en todo el país, a fines de abril eran 81, una merma de casi el 30%. Por caso, YPF redujo este año un 25% sus inversiones. El incremento de ingresos de Edenor y Edesur se atribuyó a la mejora de la calidad del servicio; sin embargo, no se les dictaminó un cronograma de inversiones. Por otra parte, el Enargas ordenó inversiones obligatorias para las distribuidoras por cifras y obras irrisorias: para Metrogas se trataría de unos 50 millones de dólares y para Camuzzi Gas del Sur unos 9 millones.

Bajo estas condiciones, la energía deja de ser un bien estratégico. La experiencia demuestra una vez más que las “señales de mercado”, es decir la extraordinaria transferencia de ingresos, no generan automáticamente nuevas inversiones. Por el contrario, el efecto directo ha sido restringir el consumo como vía para aplacar la inflación y construir de esta manera una situación recesiva que achique el mercado interno en función de un proyecto financiero-agroexportador. Prometieron que viviríamos mejor, ssinceraron” las tarifas porque vivíamos demasiado bien. No era normal.